

AAEF. CURSO DE ACTUALIZACION

ARTICULO 1° PROYECTO ENVIADO SENADO

Artículo 1°- Sustitúyase el párrafo primero, del artículo 1", del Régimen Penal Tributario incluído en el título IX, artículo 279, de la ley 27.430, el que quedará redactado de la siguiente forma:

*Artículo 1°: Evasión simple. Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere el equivalente a trescientos cuarenta y cinco (345) salarios mínimos vitales y móviles **al momento del hecho** por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un (1) año.*

LEY 27739. BO 15/3/2024.LAVADO DE ACTIVOS

- 1. Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, adquiriere, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes u otros activos provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de ciento cincuenta (150) Salarios mínimos, vitales y móviles **al momento de los hechos**, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

PROYECTO

Artículo 12 bis: *A los fines de lo previsto en los Títulos I, II y III de este Régimen Penal Tributario, se entenderá como "momento del hecho el de la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada del impuesto o el de la liquidación u otro instrumento que cumpla con aquella finalidad, de corresponder.*

Observaciones:

Utiliza el término "impuesto y no tributo"

No determina el momento del hecho cuando se trata de impuestos mensuales (utiliza el singular).

MODIFICACIONES COP.

		27430	SMVM	Agosto 2025	Julio 2025 IPC
				322,000.00	71.06
Artículo 1°	Evasion Simple	1,500,000.00	345	111,090,000.00	106,591,842.42
Artículo 2°	Evasion Agravada Inciso a)	15,000,000.00	3450	1,110,900,000.00	1,065,918,424.24
	Evasion Agravada Inciso b)	2,000,000.00	460	148,120,000.00	142,122,456.57
	Evasion Agravada Inciso c)	2,000,000.00	460	148,120,000.00	142,122,456.57
	Evasion Agravada Inciso d)	1,500,000.00	345	111,090,000.00	106,591,842.42
Artículo 3°	Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales	1,500,000.00	345	111,090,000.00	106,591,842.42
Artículo 4°	Apropiacion indebida de tributos	100,000.00	23	7,406,000.00	7,106,122.83
Artículo 5°	Evasion Previsional Simple	200,000.00	46	14,812,000.00	14,212,245.66
Artículo 6°	Evasion Previsional calificada a)	1,000,000.00	230	74,060,000.00	71,061,228.28
	Evasion Previsional calificada b)	400,000.00	92	29,624,000.00	28,424,491.31
	Evasion Previsional calificada c)	400,000.00	92	29,624,000.00	28,424,491.31
Artíoculo 7°	Apropiacion indebida de recursos de la seguridad social	100,000.00	23	7,406,000.00	7,106,122.83
Artículo 10°	Simulacion dolosa de obligaciones fiscales	500,000.00	115	37,030,000.00	35,530,614.14
	Simulacion dolosa de obligaciones prrevisionales	100,000.00	23	7,406,000.00	7,106,122.83

MOMENTO EN QUE SE CONSUMA EL DELITO

- *Perfiladas las dificultades que pueden originarse en el ámbito tributario, corresponde señalar que a los efectos penales y para la consumación del acto ilícito, la atención debe centrarse no tanto en el momento en que se produce el hecho imponible, sino en el vencimiento del pago de la obligación tributaria. La fecha en que debe obrarse el tributo delimita con exactitud se perfecciona el delito.*

Macchi. Sistema Penal Tributario y de la Seguridad Social. Editorial Abaco de Rodolfo Depalma. Pág.163

- *El delito de evasión se consuma por la omisión total o parcial del pago del tributo y, por lo tanto, se consuma cuando ha concluido el término legalmente previsto para efectuar aquel pago.*

Alejandro Catania. Régimen Penal Tributario. Pág. 78. Editores del Puerto SRL.

- *Dado que el tipo del art.1º es instantáneo, se consuma en el momento que el autor, que ha efectuado declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, se sustrae al cumplimiento de la obligación tributaria, omitiendo pagar lo que legalmente corresponde-total o parcialmente-al vencer el término predispuesto.*

Spinka. Astrea. Derecho Penal Tributario y Previsional Pág.147

- **Por lo cual la fecha de vencimiento para el pago de la declaración jurada debe considerarse como el momento donde la conducta delictiva ha sido consumada, es decir, el delito se ha cometido.**

MOMENTO EN QUE SE CONSUMA EL DELITO

- Causa 2012/03. Juzgado en lo Penal Tributario Nº 1. 8/5/2007
- **RESOLUCION:** *Que, conforme surge de fs. 16 y 17 del cuerpo “Antecedentes” de la orden de intervención nº 114.709-9, la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 1999, fue presentada el 8 de mayo de 2000; **fecha en la cual además, según surge del calendario fiscal, operaba el vencimiento para la presentación de la misma.** Esa fecha, no otra es, en mi opinión, la que debe tomarse como momento consumativo del delito*

MOMENTO EN QUE SE CONSUMA EL DELITO

- Incidente de extinción de la acción penal por prescripción formado en la causa 1826/2005. Juzgado en lo Penal Tributario Nº 3
- **RESOLUCION:** *Que, en el caso de tributos de liquidación anual, la consideración mencionada por el considerando anterior resulta, en principio, suficiente para la distinción del momento consumativo del delito previsto por el artículo 1º de la ley Nº 24.769. Sin embargo, en casos como el “sub examine”, que se trata de un tributo instantáneo que debe liquidarse e ingresarse dentro de los quince días hábiles administrativos de producida la salida no documentada o erogación, el momento de consumación debe hallarse cuando se produce el vencimiento del pago del último suceso integrante de la unidad fáctica prevista por el legislador, precisamente, porque el delito en cuestión “...no se agota con el acaecimiento del hecho imponible, sino que, por lo menos, el desarrollo del suceso deberá alcanzar el momento en que la obligación tributaria se ha tornado exigible y al momento del incumplimiento posterior de aquélla...” (confr. Regs. Nos. 522/04 y 493/05, de la Sala “B”).*

MOMENTO EN QUE SE CONSUMA EL DELITO

- Blue Film SRL sobre infracción Ley 24769. CaPecon Sala "B" 30 de Noviembre de 2009.
- **RESOLUCION** :*Que en atención a lo expresado precedentemente, en este caso, en el cual se habría omitido la presentación de los formularios de declaración del Impuesto a las Salidas No Documentadas por erogaciones carentes de respaldo documental acaecidas en el transcurso del período fiscal correspondiente al año 2001 de la contribuyente BLUE FILM SRL, **debe considerarse como fecha de consumación del hecho, aquella en la cual se produjo el vencimiento del plazo para la declaración y el ingreso del monto correspondiente a la última erogación carente de respaldo documental producida en aquel ejercicio fiscal que se omitió declarar.***

CONCURSOS MOMENTO EN QUE SE CONSUMA EL DELITO

- **Obra Social de la Federación y Centros Comerciales s/Infracción Ley 24769. CaPecon Sala A 6 de Agosto de 2012.**

Que cualquiera sea el plazo en que el contribuyente deudor de los tributos debiera cumplir con las obligaciones de cuyo pago se trata, el artículo 63 del Código Penal establece que la prescripción corre desde el día en que se cometió el hecho, es decir, en el caso, **desde que se presentó la declaración jurada presuntamente engañosa** conforme el criterio que ha sido fijado en otros precedentes de este tribunal.

CONCURSOS MOMENTO EN QUE SE CONSUMA EL DELITO

- ... Deben considerarse como fechas de consumación de los hechos y de agotamiento de las conductas típicas, aquellas en las cuales se produjeron los vencimientos de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los períodos anuales 2007 y 2008, y para pagar los montos determinados por aquellas declaraciones, las cuales en el caso fueron los días 13/02/2008 y el 18/02/2009, respectivamente.
- Por otra parte, cabe destacar que la novedosa y extremadamente peculiar postura asumida por el señor juez a cargo del juzgado "a quo", en cuanto a que el delito de evasión tributaria se trataría de un delito permanente, en principio, no sería compartida por doctrina calificada en la materia ni por ningún otro tribunal.
- **PRO LOGISTICA SA s/Evasión Simple Tributaria. CaPecon Sala "B". Febrero 2017.**

Aplicación de la ley penal más benigna

Artículo 2 CP: Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuera distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.

Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley.

En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho".

VIDAL

Frente a esta estructura normativa, la práctica legislativa en materia penal tributaria da cuenta de que el único intento que tuvo el Poder Ejecutivo Nacional para introducir un recorte al principio constitucional, en supuestos de aumentos de los “montos cuantitativos” en los tipos penales de la ley penal tributaria, fue rechazado en el trámite parlamentario que culminó con la sanción de la ley 26.735, cuyo texto –que no incluía la excepción señalada- fue promulgado por el decreto 266/2011 sin observaciones (B.O. 28.12.2011).

LEY PENAL MAS BENIGNA

		27430	SMVM	May-18	May-19	May-20	May-21	May-22	May-23	May-24	May-25
				9,500.00	12,500.00	16,875.00	24,408.00	38,940.00	84,512.00	234,315.12	308,200.00
Artículo 1°	Evasion Simple	1,500,000.00	345	3,277,500.00	4,312,500.00	5,821,875.00	8,420,760.00	13,434,300.00	29,156,640.00	80,838,716.40	106,329,000.00
Artículo 2°	Evasion Agravada Inciso a)	15,000,000.00	3450	32,775,000.00	43,125,000.00	58,218,750.00	84,207,600.00	134,343,000.00	291,566,400.00	808,387,164.00	1,063,290,000.00
	Evasion Agravada Inciso b)	2,000,000.00	460	4,370,000.00	5,750,000.00	7,762,500.00	11,227,680.00	17,912,400.00	38,875,520.00	107,784,955.20	141,772,000.00
	Evasion Agravada Inciso c)	2,000,000.00	460	4,370,000.00	5,750,000.00	7,762,500.00	11,227,680.00	17,912,400.00	38,875,520.00	107,784,955.20	141,772,000.00
	Evasion Agravada Inciso d)	1,500,000.00	345	3,277,500.00	4,312,500.00	5,821,875.00	8,420,760.00	13,434,300.00	29,156,640.00	80,838,716.40	106,329,000.00
Artículo 3°	Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales	1,500,000.00	345	3,277,500.00	4,312,500.00	5,821,875.00	8,420,760.00	13,434,300.00	29,156,640.00	80,838,716.40	106,329,000.00
Artículo 4°	Apropiacion indebida de tributos	100,000.00	23	218,500.00	287,500.00	388,125.00	561,384.00	895,620.00	1,943,776.00	5,389,247.76	7,088,600.00
Artículo 5°	Evasion Previsional Simple	200,000.00	46	437,000.00	575,000.00	776,250.00	1,122,768.00	1,791,240.00	3,887,552.00	10,778,495.52	14,177,200.00
Artículo 6°	Evasion Previsional calificada a)	1,000,000.00	230	2,185,000.00	2,875,000.00	3,881,250.00	5,613,840.00	8,956,200.00	19,437,760.00	53,892,477.60	70,886,000.00
	Evasion Previsional calificada b)	400,000.00	92	874,000.00	1,150,000.00	1,552,500.00	2,245,536.00	3,582,480.00	7,775,104.00	21,556,991.04	28,354,400.00
	Evasion Previsional calificada c)	400,000.00	92	874,000.00	1,150,000.00	1,552,500.00	2,245,536.00	3,582,480.00	7,775,104.00	21,556,991.04	28,354,400.00
Artículo 7°	Apropiacion indebida de recursos de la seguridad social	100,000.00	23	218,500.00	287,500.00	388,125.00	561,384.00	895,620.00	1,943,776.00	5,389,247.76	7,088,600.00
Artículo 10°	Simulacion dolosa de obligaciones fiscales	500,000.00	115	1,092,500.00	1,437,500.00	1,940,625.00	2,806,920.00	4,478,100.00	9,718,880.00	26,946,238.80	35,443,000.00
	Simulacion dolosa de obligaciones prrevisionales	100,000.00	23	218,500.00	287,500.00	388,125.00	561,384.00	895,620.00	1,943,776.00	5,389,247.76	7,088,600.00

JURISPRUDENCIA

En un reciente fallo en donde se trató la cuestión mencionada se consideró que *“...a fin de corroborar si la reforma introducida por la ley en cuestión, resulta más benigna, corresponde verificar el monto de los Salarios Mínimos Vitales y Móviles existentes a las fechas de los hechos”*. Así, entendió que el salario mínimo vital y móvil a partir de 1 de agosto de 2013 se estableció en la suma de \$3.300 y que a partir del 1 de enero de 2014 se fijó en el monto de \$3.600, por lo que, al tener en cuenta los montos de los hechos imputados y los salarios mínimos vitales y móviles establecidos a la fecha de los hechos, *“...se advierte que la reforma introducida no resulta ley penal benigna, por cuanto no desincrimina las conductas que se les atribuyeran a los imputados”*

Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 3, “Incidente de prescripción en: Schutt, Ricardo Nils y otros s/ infracción art. 303 del Cód. Penal”, 03/05/2024, causa CFP 11883/2014 TR LALEY AR/JUR/50129/2024

JURISPRUDENCIA

Pues bien, con fecha 15 de marzo del corriente año, fue publicada en el Boletín Oficial la Ley 27.739 que reformó una serie de disposiciones del Código Penal, entre ellas, el art. 303 correspondiente al delito de lavado de activos. Respecto a este delito, fue modificada la condición objetiva de punibilidad, ya que anteriormente el ilícito se configuraba cuando el valor de los bienes que se pusieran en circulación en el mercado superase la suma de pesos trescientos mil (\$300.000), mientras que en su redacción actual la suma de todas las operaciones debe superar el valor de 150 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) al momento de los hechos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. Asimismo, fue añadido en el inc. 1 el verbo típico “adquirir”, y en el inc. 4 la pena de 6 meses a 3 años de prisión fue sustituida por la multa de 5 a 20 veces el monto de la operación.

Sentado lo anterior, conforme lo establecido en el nuevo art. 303 inc. 1 del Código Penal, a los efectos de determinar si el hecho imputado a Micaela Schöring alcanza la condición objetiva de punibilidad, es necesario determinar el valor del SMVM vigente al momento de los hechos, según lo dispuesto por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil y, luego constatar si estos superan la suma de 150.

Incidente N° 12 IMPUTADO: SCHÖRNIG, MICAELA S/ INCIDENTE DE FALTA DE ACCIÓN” (Expte. N° FCB 39955/2019/TO1/12) 15 de mayo de 2024. TOF. 1 Córdoba

CONCLUSIONES.

1. Se dejaría sin tratamiento el proyecto de "inocencia fiscal", que preveía modificaciones al RPT. En cuanto a los montos, valores fijos que permitían sobreseer todas las causas en tramite con valores inferiores a esos montos.
2. Si se adopta el criterio que hoy se sostiene con el lavado de activos, no se considera el monto del SMVM al momento de la vigencia de la norma, sino al "momento de los hechos".
3. Si se hubiera utilizado otra unidad como la UVT, los hechos consumados con anterioridad a su vigencia deberían sobreseídos.

ASOCIACION ILICTA FISCAL

Art. 15 - El que a sabiendas:

c) Formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer, colaborar o coadyudar cualquiera de los ilícitos tipificados en esta ley, será reprimido con prisión de tres (3) años y seis (6) meses a diez (10) años. Si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se elevará a cinco (5) años de prisión

ASOCIACION ILICTA FISCAL

Ley 27743.

Art. 5 - El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto se producirá cuando se cancele, por parte de cada imputado, la deuda que le fuera exigible de manera individual (conforme la imputación penal efectuada), en las condiciones previstas en el presente régimen.

Decreto 608/2024

ARTÍCULO 1°.- La cancelación de las obligaciones incluidas en el marco de lo previsto en el Régimen del Título I de la Ley N° 27.743, producirá la extinción de la acción penal -en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación- respecto de todos los partícipes, así como también de las personas imputadas por delitos fiscales comunes enumerados en los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 15, inciso c), del Régimen Penal Tributario del Título IX de la Ley N° 27.430 y sus modificatorias, si dichas imputaciones se vinculan a obligaciones tributarias incluidas o canceladas bajo el presente Régimen, o que hubieran sido canceladas con anterioridad.

“SANTIAGO OSCAR Y OTROS P.SS.AA INF. LEY 24.769 (Expte. 12000035/2012/TO1)” TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2.16/08/2024. VOTO DE LA MAYORIA.

En el caso de autos, los imputados vienen acusados en calidad de jefes, organizadores y coautores por un solo hecho calificado como asociación ilícita fiscal, previsto en el art. 15 inc. c) de Ley 24.769. Así, los tres imputados, a tra vés de Oscar Lucas Santiago, presidente de Helacor SA, se acogieron a la Ley de blanqueo N° 26.860 y depositaron a la AFIP la suma de dos millones de dó lares (USD 2.000.000) en base a la “estimación” de ventas omitidas de declarar realizada por la DGI.

En apretada síntesis, el derrotero judicial del acogimiento a la Ley N° 26.860 por parte de los imputados y la consecuente amnistía judicial que áca rreaba fue concedida en primera instancia, hasta que —en revisión ante ca sación— fue revocado el decisorio. Valga decir que entonces, y a diferencia de lo que sucede hoy, el delito de asociación ilícita fiscal no era señalado por la norma, en forma expresa, entre los delitos que habilitaban la extinción de la ac ción penal mediante el régimen en cuestión. De tal modo, la discusión sobre los alcances de aquella disposición re sulta, pues, hoy zanjada con el dictado de la nueva ley de Regularización y Blanqueo y su decreto reglamentario, que —de manera explícita— hace alu sión a dicha figura penal, al señalar el catálogo de delitos susceptibles de pro ducir extinción de la acción penal respecto de todos sus partícipes e imputados. En razón de lo expuesto, corresponde hacer lugar al planteo de aplica ción retroactiva de ley penal más benigna formulado por la defensa y, en con secuencia, debe disponerse el sobreseimiento de los imputados Oscar Lucas Santiago, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago, por extinción de la ac ción penal, en función del acogimiento voluntario por parte de la firma HELA COR S.A. a los beneficios de ley 26.860 (arts. 334 y 336 inc. 1 CPPN).

“SANTIAGO, Oscar Lucas y otros s/ recurso de casación”. CFCP SALA 4. 18/7/2025. Mayoría

Así las cosas, corresponde señalar que las leyes de amnistía fiscal exigen para la obtención del beneficio que el contribuyente regularice su situación fiscal sea abonando todo lo adeudado o acogiénose a un plan de pagos que debe respetar a condición del sostenimiento del beneficio concedido.

A partir del minucioso estudio de las conductas juzgadas que serían atribuibles a los encausados, no es posible sostener que puedan ser alcanzadas por este beneficio, sin perjuicio de lo introducido en el decreto reglamentario reseñado. Tal cómo surge de lo expuesto precedentemente el art. 1 del Decreto 608/2024 no establece que en todos los casos de imputaciones por el delito de asociación ilícita fiscal podrá extinguirse la acción penal por cancelación de obligaciones en los términos del título I de la ley 27.743 sino sólo en aquellos casos en los que la imputación por art. 15 inc. c del régimen penal tributario se vincule a obligaciones totalmente incluidas o canceladas en el marco de ese régimen o con anterioridad.

Así se advierte que tampoco se ha demostrado la “cancelación total” de las obligaciones que resultaron incumplidas como consecuencia de la actuación de la organización criminal. No se han identificado cuáles fueron todas las obligaciones vinculadas a la actuación de la asociación ilícita y tampoco se ha demostrado que todas ellas hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.743 o que hayan sido extinguidas mediante pago de contado. Es que, cabe recordar, el artículo 5 de la ley 27.743 exige “cancelación total” de las obligaciones que estuvieran vinculadas al delito cuya acción penal se pretende extinguir

“SANTIAGO, Oscar Lucas y otros s/ recurso de casación”. CFCP SALA 4. 18/7/2025. Minoría

Que, como se ha expuesto a lo largo de nuestro sufragio, luego del minucioso examen constitucional llevado a cabo por las magistradas del tribunal a quo respecto de la norma cuestionada por el recurrente (decreto PEN 608/2024), y con arreglo a las pautas interpretativas establecidas en la doctrina del máximo Tribunal, no cabe más que concluir, además de lo ya señalado con relación a la Ley 27743, que no se advierte, ni la parte impugnante ha logrado demostrar, la invalidez constitucional que invoca al alegar -a nuestro criterio en forma desacertada- un supuesto exceso en las facultades propias del Poder Ejecutivo en cuanto a la reglamentación de las leyes (art. 99 CN) en desmedro del principio de legalidad.

Sobre esta última cuestión vinculada a la “cancelación total”, no advertimos yerro alguno en la evaluación que hizo la judicatura de la anterior instancia, pues allí se hizo alusión específica al informe de verificación elaborado por los funcionarios de la por entonces Dirección General Impositiva (DGI) por medio del cual se determinó que: “(E)l monto exteriorizado por la empresa y afectado a la inspección, supera considerablemente los resultados a que ésta arribara, según se detalló en la planilla ‘ESTIMACIÓN DE VENTAS OMITIDAS DE DECLARAR (...)’” (cuya transcripción se efectúa con mayor precisión en el fallo recurrido, al que nos remitimos por razones de brevedad).

De este modo, tomando en especial consideración que la norma que viene a examen no prevé la limitación que sostiene el Ministerio Público Fiscal, habremos de concluir que la postura sostenida por esa parte -que se asienta sobre una interpretación restrictiva del régimen de regularización previsto en la Ley 27743, reglamentado por el decreto PEN 608/24-, se deriva de una exégesis normativa in malam parte que, por un lado, desatiende los fines recaudatorios que motivaron la sanción de la norma bajo análisis y el particular contexto económico subyacente, mientras que, por el otro, no se ajusta a los lineamientos sentados por el máximo Tribunal en el antes citado fallo “Acosta”